

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel·lació núm. 363/2015
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona Procediment ordinari núm. 356/2012

Apel·lant/ apel·lada: GVS.L
Representant de l'apel·lant/ apel·lada: SR. FXI·IA, Procurador
Apel·lat/ apel·lant: IL·LM. AJUNTAMENT DE BERGA
Representant de l'apel·lat/apel·lant: SR. ALN Procurador

S E N T È N C I A núm. 383

Magistrats/ ades:

IL·LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President
IL·LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL
IL·LM. SR. HECTOR GARCIA M ORAGO

Barcelona, 16 de juny de 2017

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l'art 117.1 de la Constitució, ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel·lació

FONAMENTS DE DRET

PRIMER: Tal com ja hem expressat, en el procediment ordinari núm. 356/2012, promogut per GVBSL contra L'IL·LM.

AJUNTAMENT DE BERGA amb l'oposició afegida de REALE SEGUROS GENERALES S.A., el Jutjat

Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona

dictà la Sentència núm. xx4, de xx de maig de 201x amb el veredicté que segueix:

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de GVBSL contra la desestimación por silencio administrativo de su reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en fecha xx de febrero de 201x ante el Ayuntamiento de Berga ampliado posteriormente a la resolución expresa de la Junta de Gobierno Local de fecha xx de febrero de 201x, se anula la citada resolución y

se declara la existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento con la condena al mismo a abonar a la

actora la cantidad de 148.287,59 euros, más los intereses legales devengados desde la fecha de la presentación de la reclamación en vía administrativa hasta su completo pago.”

La susdita Sentència definí l'objecte del litigi i resolgué la controvèrsia en els termes que segueixen (els subratllats seran nostres):

“PRIMERO.- La parte actora interpone el presente recurso contra la desestimación por silencio administrativo de su reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en fecha 10 de febrero de 2012 ante el Ayuntamiento de Berga ampliado posteriormente a la resolución expresa de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de febrero de 2012 que acuerda:

“Primer.- Desestimar la sol·licitud d'incoació de responsabilitat patrimonial per extemporània en quant hi ha un procediment encara no finalitzat, ni s'ha procedit, en execució de sentència, a avaluar les actuacions a dur a terme en relació a la llicència concedida i sobre la que s'ha seguit el procediment de lesivitat.

Segon.- Incoar l'expedient d'execució de la Sentència 261/2011 (JCA n. 4 de Barcelona, recurs 71/2008), en el sentit d'ordenar als serveis tècnics i sense perjudici de la incidència que pugui tenir l'incident de nul·litat d'actuacions pendent de resoldre, l'anàlisi urbanística i edificatori, a fi de que emetin un informe respecte si procedeix delimitar un Polígon d'Actuació amb l'abast de les parcel·les afectades, així com si l'edifici, en la fase avui construïda, podria conservar-se total o parcialment, amb distribució en el seu cas amb divisió horitzontal, per fer les adjudicacions corresponents en la reparcel·lació, i si per això resultaria, amb les modificacions escaients, legalitzable part de l'edifici avui existent, així per a l'informe facin constar quantes altres qüestions creguin necessàries.

Tercer.- Tenir per presentat l'escrit de Gran Via Berga, SL, amb les manifestacions que hi conté, si bé als efectes d'interrompre de l'acció de reclamació de responsabilitat patrimonial, per si aquesta s'esdevingués estimable.

Quart.- Nomenar a l'arquitecte Municipal, com a responsable de l'execució de la Sentència.

Cinquè.- Una vegada emès l'informe tècnic i jurídic, si aquest és necessari, convocar als propietaris afectats, per una reunió tècnica.”

Sisè.- Notificar aquesta proposta de resolució a tots els propietaris afectats, per una reunió tècnica.”

Solicita la actora el dictado de una sentència que reconozca una indemnización de 3.303.627,92 euros con el

sigüente desglose: 937.925,31 euros de coste de la obra efectivamente ejecutada; 388.661,61 euros de carga hipotecaria que grava las fincas (subsidiariamente, reclama los intereses y gastos de apertura del préstamo hipotecario por importe de 51.440,29 euros); 56.232 euros por pérdidas generadas por no materializarse el convenio suscrito para repartir los costes de instalación de un centro transformador de electricidad para tres sociedades y 77.629 euros por gastos para llevar la luz; 480.000 euros por incumplimiento de la escritura de permuta con los cedentes del solar; 360.000 euros por las plazas de aparcamiento adquiridas según estipulaba la

El alcance y contenido del referido derecho, por consiguiente, actualmente viene determinado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo art. 139 dispone:

«1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas».

Pues bien, según tiene firmemente establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para poder apreciar la existencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas conforme a la legislación antes citada es preciso que concurren una serie de requisitos que, resumidamente expuestos, son los siguientes: a) la realidad o efectiva existencia de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas; b) que el daño o lesión patrimonial sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal; y c) que no se haya producido fuerza mayor.

Por otra parte, habida cuenta de que los recurrentes consideran que los daños cuya reparación reclaman traen causa de la anulación de una licencia para la construcción de viviendas locales y trasteros que les había sido previamente otorgada, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el art. 142.4 de la Ley 30/1992, conforme al cual «la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización», lo que no impide que surja este derecho cuando, en los términos que se han indicado, se haya producido un perjuicio o daño efectivo que, por su carácter antijurídico y por traer causa directa de una actuación de la Administración, resulte imputable a ésta y por la misma deba ser reparado conforme a las ordinarias reglas de la responsabilidad administrativa patrimonial (así, entre otras muchas, la STS de 16 de septiembre de 1999 [Arz. 7746]).

Conclusión a la que igualmente debemos llegar a la luz de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, cuyo art. 44.2 dispone que «Cuando se produzca la anulación de una licencia..., los perjudicados podrán reclamar de la Administración el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las normas que regulan con carácter general dicha responsabilidad». Derecho a la reparación de los daños sufridos que el mismo precepto niega, sin embargo, «si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado» (art. 44.2 in fine).

Existe en este particular una reiterada doctrina jurisprudencial -entre otras, en sentencias de 21 de marzo, 2 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero, 13, 29 y 12 de julio de 1999 y 20 de julio de 2000- que sostiene la exoneración de la responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido. Asimismo, en la sentencia de 15 de abril de 2003, se alude a "la forma de presentar el proyecto, actuación en el procedimiento, demás circunstancias concurrentes, etc. mediante formas o modos inexactos que pudieran razonablemente inducir a error a la Administración" (como ocurría en los casos resueltos en sentencias 26 septiembre 1981, 14 diciembre 1983, 3 diciembre 1986 y 30 enero 1987), y "ocultando o desfigurando datos que puedan inducir a error a la Administración" (así en el resuelto en la sentencia 22 noviembre 1985). Por su parte la sentencia de 28 de mayo de 1997, por referencia a la de 30 de septiembre de 1987, señala que "es doctrina jurisprudencial reiterada que la culpa o negligencia graves (y, por supuesto, el dolo) no se originan por el conocimiento más o menos completo que se pueda tener de la infracción, porque la "gravedad" exige que la conducta sea tan intensa que la licencia no se hubiera dado sin ella -sentencia de 4 de julio de 1980- y que se proyecte sobre el procedimiento de concesión, puesto que las normas urbanísticas obligan a la Administración y a los administrados y el Ayuntamiento no puede prescindir de un examen acabado para comprobar si el proyecto está o no conforme con el Plan". En este último aspecto insiste más adelante la sentencia de 28 de mayo de 1997, señalando que "como declara la sentencia de 22 de noviembre de 1985 «no se puede olvidar que las normas urbanísticas obligan a la Administración y a los administrados y que el Ayuntamiento para otorgar la licencia no puede prescindir de un examen acabado para comprobar si el proyecto está conforme con el plan o las normas urbanísticas aplicables para lo cual dispone de los informes de sus servicios técnicos»".

TERCERO.- En primer lugar, resultan de interés en el presente recurso contencioso los siguientes hechos:

determinado el otorgamiento de la licencia urbanística para la edificación de un edificio plurifamiliar locales y trasteros, por el hecho de que en los planos del proyecto presentado apareciera pintada de azul la parcela objeto de la licencia de manera que impidiera ver las indicaciones de metros de profundidad edificable que constaban en los planos del POUM, pues precisamente de esta manera quedaba perfectamente ubicada y delimitada la parcela y su profundidad con el resalte en color, y el técnico del Ayuntamiento debió verificar la documentación aportada y comprobar si el proyecto se adecuaba al planeamiento de aplicación, y si hubo un error interpretativo de los servicios técnicos municipales como se apunta como posibilidad en la contestación a la demanda del Ayuntamiento dada la reciente entrada en vigor del POUM en el mismo año 2005 en que se solicitó la licencia, en ningún caso puede deducirse de ello dolo, culpa o negligencia grave del administrado del artículo 44.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, determinante de la indebida concesión de la licencia, que exonere a la Administración de su obligación de comprobar si el proyecto era o no conforme con la normativa urbanística, cuya decisión se plasmó en la correspondiente resolución administrativa de concesión de licencia de la cual es responsable la Administración. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de mayo de 1997 señala que "como declara la sentencia de 22 de noviembre de 1985 «no se puede obviar que las normas urbanísticas obligan a la Administración y a los administrados y que el Ayuntamiento para otorgar la licencia no puede prescindir de un examen acabado para comprobar si el proyecto está conforme con el plan o las normas urbanísticas aplicables para la cual dispone de los informes de sus servicios técnicos»".

También se opondrá por la defensa de la Administración que la sentencia que estimó la anulabilidad de la licencia estableció el procedimiento a seguir, en cuanto revisar y tramitar los instrumentos de gestión o mecanismos que procedan para el justo reparto del aprovechamiento urbanístico, no obstante dicha sentencia de fecha 28 de julio de 2011 del Juzgado Contencioso nº 4 de Barcelona estimó el recurso de lesividad presentado por el Ayuntamiento anulando la licencia urbanística y abrió las puertas a la exigencia de responsabilidad patrimonial, de acuerdo con el citado artículo 44.2 de la Ley 6/1998, y concordantes sobre esta materia, y no tiene nada que ver el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado con la ejecución de la citada sentencia, independientemente de su efectiva ejecución con la anulación de la licencia y, en consecuencia, tampoco se ha producido la alegada extemporaneidad de la reclamación por prematura.

QUINTO.- Procede entrar a continuación en el análisis de las partidas indemnizatorias solicitadas por la actora:

1.- Coste de la obra efectivamente ejecutada: 937.925,31 euros. Aporta la actora junto a la demanda como documento nº 6 hoja de cálculo con el detalle de costes y documentos justificativos.

No obstante, no pueden admitirse estos costes —salvo los que dirán seguidamente—, pues no se acredita el pago de los mismos en la mayoría de los casos, siendo manifiestamente insuficiente que afirme la actora que el detalle se extrae de la contabilidad de la empresa a 03.10.11. En este sentido, el perito de designación judicial indica que "hem de suposar que totes les factures han estat finalment pagades i que els compromisos assumits han estat acomplerts", suposición que no equivale a costes efectivos y reales debidamente acreditados, carga de la prueba que correspondía a la parte actora en virtud del artículo 217 LEC. Nótese que la labor del perito se ha limitado a cotejar unos documentos, no a valorar las obras ejecutadas. Además, en cuanto a los costes posteriores a la fecha de la anulación de la licencia no se justifica su necesidad.

Sin perjuicio de lo anterior, se admiten como costes resarcibles los importes por las licencias urbanísticas por 1.319,12 euros, el permiso de obras por 18.467,67 euros, por su carácter necesario para construir que han devenido inútiles con la anulación de la licencia, y lo mismo ocurre con las liquidaciones de impuestos por la obra nueva y la división horizontal por 14.432,40 y 9.632,40 euros, respectivamente, según cartas de pago, pues ninguna utilidad tendrán dichas operaciones jurídicas al no poderse llevar a cabo la promoción en los términos del proyecto inmobiliario licenciado. La suma en conjunto de estas partidas es de 43.851,59 euros.

2.- Carga hipotecaria: 338.661,61 euros; subsidiariamente, intereses por 45.665,29 euros, y gastos de apertura del préstamo por 5.775 euros, que suman 51.440,29 euros.

En cuanto a la carga hipotecaria la parte actora aporta certificado de Catalunya Banc, SA acreditativo de dicho saldo a 02.10.13 (documento nº 7 anexo a la demanda) y manifiesta que hipotecó la finca adquirida para sufragar los gastos del proceso constructivo, sin embargo, se trataría de un préstamo para la adquisición de un solar adquirido por la recurrente que no tiene que asumir la Administración por la anulación de la licencia, pues el bien continúa siendo propiedad de la mercantil. Por otra parte, no queda acreditado el destino de los fondos a esta promoción, y con ello tampoco que la carga financiera sea imputable a la obra.

aprovechamiento urbanístico, la actora está solicitando la indemnización de meras expectativas, lo que como se ha dicho no tiene cabida como daño indemnizable en el marco de la responsabilidad patrimonial de la Administración, y en ese sentido ha de concluirse que no cabe apreciar la vulneración de los preceptos y jurisprudencia que se citan en los motivos de recurso que, por tanto, deben ser ambos desestimados."

Y, en el caso de autos, el lucro cesante solo sería indemnizable si la recurrente pudiera esgrimir algún derecho a llevar a cabo la promoción inmobiliaria tal y como la tenía proyectada derecho inexistente dado que tal proyecto se oponía a las normas urbanísticas. Además este lucro cesante se calcula a partir de unas expectativas de negocio que no son reales.

Por todo ello la cantidad reconocida como procedente asciende a un total de 148.287,59 euros, importe al que deberán añadirse los intereses legales devengados desde la fecha de la presentación de la reclamación en vía administrativa hasta su completo pago.

SEXTO.- Por lo que se refiere a las cuestiones relativas a la cobertura de la póliza de seguros firmada por el Ayuntamiento y su aseguradora RSSA, no pueden ventilarse en este pleito en el que el objeto del mismo es la resolución administrativa impugnada, sin que la parte actora realice ninguna pretensión de condena a la aseguradora, por lo que debe tenerse a la compañía aseguradora por comparecida a los solos efectos de defender la legalidad del acto impugnado."

SEGON: L'anàlisi conjunt de dues apel·lacions creuades farà que sigui aconsellable exposar el contingut de cada recurs per separat, amb expressió, en cada cas, de les pretensions esgrimides i de les posicions enfrontades.

Per raons d'ordre sistemàtic, començarem per l'apel·lació deduïda per l'Ajuntament de Berga, el resum de la qual –rèplica de l'altra part inclosa- podria sintetitzar-se en els termes que segueixen:

1: Influència de la conducta de GVBSL en sorgiment del dany

En aquest punt, l'Ajuntament persegueix, essencialment, que la responsabilitat patrimonial contreta per la Corporació (la qual no es nega), es vegi determinada un cop puguin ser perfilats i quantificats de forma íntegra i amb rigor els conceptes integrants de la indemnització o, subsidiàriament, quan s'acrediti amb exactitud la necessitat de demolició total d'allò que s'hauria construït. I no sense deixar de ponderar, alhora, la part de culpa imputable a GVBSL.

La tesi feta valer per l'Ajuntament a través de la seva apel·lació, la podríem resumir així:

-La Sentència apel·lada hauria d'haver apreciat "concurrència de culpes", atès que la concessió de la llicència, en bona mesura es veié propiciada per un projecte d'obres que a la seva Memòria hauria deixat constància que es coneixia el planejament urbanístic aplicable, a banda d'afirmar l'adequació del propi projecte a aquest planejament. Coneixament, doncs, del planejament d'aplicació al cas, que no hauria impedit preveure, en el projecte esmentat, un percentatge

TERCER: Pel que fa a l'apel·lació promoguda per GVBSL, haurem de començar per assenyalar que aquest empresa pretén que la Sentència d'instància esdevingui revocada i que, el seu lloc, el recurs deduït en el seu moment sigui estimat íntegrament, amb un reconeixement afegit del dret a percebre una indemnització de 3.303.627,92 euros.

Es tracta d'una apel·lació centrada en la valoració dels danys i perjudicis soferts. Danys i perjudicis que GVBSL ha pretès justificar amb un conjunt de consideracions que podríem resumir de la manera que segueix:

1: Quant a la reclamació de 937.925,31 euros, en concepte de "cost de l'obra efectivament executada", la Sentència la rebutja perquè considera que no han estat acreditats els corresponents pagaments; però les factures aportades no van ser qüestionades –dada, aquesta, essencial i determinant– i, d'altra banda, es tracta d'una despesa efectuada, la qual en algun moment haurà de liquidar-se.

Subsidiàriament és reclamen els 807.950,37 euros reconeguts pel pèrit judicial.

2: Respecte de la càrrega hipotecària que grava els solaris de la promoció (inclosos els interessos meritats), erra la Sentència apel·lada en considerar que es tracta d'un concepte no indemnitzable pel fet de mantenir GBSL la propietat dels terrenys.

Els terrenys van ser adquirits mitjançant permuta, a satisfer amb pisos de la promoció que no ha estat possible executar i lliurar, amb la qual cosa no hauria estat possible consumir el contracte i la consegüent transferència patrimonial.

D'altra banda, la hipoteca hauria permès en el seu moment disposar de líquid per tal d'executar unes obres –si més no parcialment– la realitat de les quals no ha estat posada en èntredit. Altrament dit: la hipoteca va servir per tal de finançar, no pas l'adquisició del sòl, sinó l'execució de les obres.

Com a mínim, la Sentència hauria d'haver reconegut els 51.440 euros admesos pel pèrit judicial en concepte d'interessos i despeses d'obertura.

3: Quant als 480.000 euros en concepte de preu d'adquisició del solar, la Sentència apel·lada els hauria d'haver reconegut seguint les indicacions del pèrit judicial; perquè atès que les obres executades s'hauran d'enderrocar i no serà possible materialitzar la permuta pactada, la susdita xifra els hi haurà de ser inevitablement satisfeta als venedors del sòl. No debades, la Sentència núm. 143, de 18 de novembre de 2015, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm 2 de Berga en el sí del procediment ordinari núm. 448/2014, estimà la demanda dels venedors i

D'altra banda, algunes de les factures eren de data molt posterior a la suspensió de les obres. I, en qualsevol cas, el fet que les factures no haguessin estat impugnades, en cap cas havia de suposar l'acceptació de l'exactitud de les dades econòmiques que pretenien reflectir.

Resta acreditat que l'Ajuntament s'oposà al reconeixement del concepte que ara ens ocupa, i que ho va fer en els termes més amples i contundents possibles.

B.2: Quant a la càrrega hipotecària, no deixa de ser rellevant la coincidència entre l'import de la hipoteca i el preu de compra, pactat com a alternativa a la permuta en el contracte d'adquisició del sòl. A banda de ser, avui per avui, una mera hipòtesi la desaparició total de les obres executades.

B.3: La Sentència que anul·là la llicència en cap cas imposà l'enderrocament de les obres. Contràriament, apuntà a una regularització, el resultat de la qual justificaria l'adquisició del solar i, alhora, el preu a satisfer pel mateix.

En l'anterior sentit, es posa en relleu que tant el perit de GVB SL com el perit judicial, van acceptar la possibilitat de mantenir una part de les obres.

I no canvia les coses la Sentència núm. 143, de 18 de novembre de 2015, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm 2 de Berga en el sí del procediment ordinari núm. 448/2014, perquè, a banda de no constar la seva fermesa, no ha fet sinó corroborar la titularitat de l'immoble (de tot l'immoble) per part de GVB SL.

B.4: Pel que fa a les places d'aparcament, no consta cap escriptura pública d'adquisició del sòl ni cap prova de pagament.

B.5: I en allò que respecta al "lucre cessant", es pretén fonamentar en un aprofitament urbanístic al qual no es tenia dret i, alhora, en unes expectatives irrealistes i mancades de base probatòria.

D'altra banda, no es descompte el benefici que es podria obtenir amb la materialització de l'edificació realment permesa pel planejament.

Per últim, el propi perit de l'actora hauria admès el caràcter no habitual d'un benefici situat entre el 40 i el 47%.

QUART: Tot seguit aquest Tribunal haurà de pronunciar-se sobre els diferents extrems de la *litis*, i ho haurà de fer sistematitzant i analitzant en unitat d'acte tots els punts controvertits, seguint –com no podria ser d'altra manera– la lògica imposada per les qüestions objecte de debat.

concloent a propòsit del grau de responsabilitat de GVBSL. Tanmateix, sí que podrem reconèixer el dret de l'Ajuntament a ponderar prudentment, quan arribi el moment, la influència, en el desenllaç dels esdeveniments, de la conducta observada per la promotora. Conducta, aquesta, palesada –més enllà dels plànols- en un projecte en el qual es declarava per escrit el coneixement que es tenia del planejament urbanístic aplicable; això sí: no sense consignar un percentatge d'ocupació que era incompatible amb el susdit planejament.

Ponderació –la que acabem d'esmentar- que no podrà perdre de vista que el principal i últim responsable de la legalitat urbanística, era i és l'Ajuntament.

3: Caràcter prematur de la reclamació de responsabilitat patrimonial, sens perjudici del caràcter no indemnitzable de determinats conceptes

El caràcter “efectiu” dels danys i perjudicis, que el nostre ordenament jurídic imposa com a requisit *sine qua non* de la responsabilitat patrimonial de l'Administració, ens haurà de conduir a qualificar com a *prematura* en bona mesura, la reclamació compensatòria promoguda per GVBSL.

Despeses tals com les relatives al cost de l'obra executada o al cost de l'enderrocament, no es podran quantificar amb certesa fins que la promotora, prèvia llicència, no hagi encerrocant l'estructura inacabada existent. Aquesta dada

–la de l'enderrocament efectiu- sancionarà la inutilitat de l'obra executada i donarà carta de naturalesa al dany emergent; a un dany emergent que ja es podrà considerar perfectament consolidat i la quantificació del qual serà precís acreditar amb documentació apte a tals efectes, sens perjudici de les tasques de comprovació que vulgui fer l'Ajuntament.

Com també serà aquest el moment a partir del qual GVBSL podrà reclamar el concepte “lucre cessant”, amb dades –això sí- associades al benefici que hauria pogut obtenir d'haver edificat de conformitat amb el planejament urbanístic.

Constituiria un despropòsit i una mena de contribució a un enriquiment irregular, compensar la promotora partint d'aprofitaments que no tenia dret a consolidar.

Afegir que dins del concepte “cost de l'obra” s'escaurà prendre en consideració, tant les taxes satisfetes, com l'impost de construccions, sens perjudici de la liquidació compensatòria que s'hagi de fer arran de la futura llicència d'enderrocament. Ara per ara això resulta impossible, davant l'eventualitat que en

2.2: DESESTIMAR el susdit recurs contenciós administratiu ordinari, promogut per GVBSL contra L'IL·LM. AJUNTAMENT DE BERGA, pels motius expressats en el cos d'aquesta Sentència.

Sense costes.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l'art. 89 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'art. 89.2 LJCA i només podrà fonamentar-se en la vulneració del dret estatal o europeu. En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

No hi cabrà, en canvi, recurs de cassació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fonamentat en l'eventual vulneració del dret autonòmic, en equiparar-se, en aquest cas, les Sentències dictades per la Sala del Tribunal Superior, a les dictades per la Sala 3^a del Tribunal Suprem en el seu propi àmbit (Resolucions interlocutòries de 10 de maig de 2017, entre d'altres, dictades per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els recursos de cassació autonòmica núm. 3/2017 i 8/2017).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel·lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes, als efectes de les diligències d'execució que s'escaiguin, així que el present veredicte hagi esdevingut ferm.